

nómicos vinculados y lo requieren diversos compromisos internacionales, pero, sobre todo, es una deuda que tenemos con las futuras generaciones.

Por ello, este año debe significar un cambio profundo y positivo para el sector. Si los procesos mencionados líneas arriba continúan bien conducidos —es decir, si no caen en la desidia política o en las minucias de la burocracia «profesional»—, debemos poder contar temprano, en el año, con dos elementos clave para la gobernanza del sector: una Política Forestal Nacional, adoptada por el Ejecutivo, y una Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ambas ampliamente consensuadas, que den oportunidades a todos los actores, aseguren la perpetuidad de los ecosistemas forestales y su provisión permanente de bienes y servicios —cada vez más importantes de cara al cambio climático y la escasez de agua—, y generen riqueza en forma sostenible para las poblaciones rurales más pobres del Perú.

Ahora, para aplicar estas políticas y normas legales es preciso concretar la creación de un Servicio Nacional Forestal. Esto debe hacerse acorde con el proceso de descentralización en curso, con un enfoque de gestión ecosistémica y moderna del sector forestal, buscando el apoyo de los programas de cooperación internacional y coordinando con los gobiernos regionales —con los cuales deberá concluirse la transferencia de funciones.

Dado que el principal problema del sector ha sido, históricamente, una gobernanza muy inadecuada, se espera que centrarse en construir un contexto legal e institucional con enfoque participativo y transparente deberá contribuir a generar el profundo cambio que dicho sector requiere. De no lograrse este objetivo, llegará agosto de 2010 y correremos el riesgo de no haber cumplido con los mandatos del TLC. Las consecuencias son potencialmente graves, no solo para el sector forestal, sino para todo el país, especialmente para quienes más se benefician del tratado.

Para resumir: si bien hay buenas perspectivas para el sector forestal en 2010, el pronóstico es reservado.

Drogas, coca y cocaleros

Sin novedad en el frente

La continuación de una política prohibicionista y represiva, en línea con la política estadounidense, hace presagiar un año con más de lo mismo: incremento de la presencia militar, fracaso de los «cultivos alternativos» y fortalecimiento de Sendero en las zonas cocaleras.

Por Hugo Cabieses, economista, coordinador del Programa DRIS/ZA-MANU



En 2010, no cabe esperar grandes cambios en el panorama político y social vinculado a la economía de la coca y las drogas en el Perú, sino más bien la continuación de las tendencias que caracterizaron 2009 y los años anteriores. En ese sentido, planteamos el análisis de lo que se viene, este año, desde cuatro ejes clave: la política de EE.UU. sobre las drogas, la política del gobierno peruano, el estado de los movimientos sociales y el desarrollo de Sendero Luminoso en las zonas cocaleras.

El continuismo de Obama

Para 2010, no debemos esperar cambios sustanciales en la política norteamericana sobre drogas y, por lo tanto, sobre el cultivo de coca. Barack Obama ya tiene un año ocupando la presidencia y ello no ha significado ningún cambio de política en el tema.

Es decir, continúan el prohibicionismo, la «guerra contra las drogas», el control militarizado de la oferta, la erradicación/ fumigación de cultivos y la criminalización de los movimientos sociales asociados a estos cultivos y a sus actividades conexas. Y ello a pesar de que, como resultado de seguir con estas políticas, todos los indicadores a nivel del planeta señalan que se han incrementado la producción, el consumo y el tráfico de drogas, así como la violencia, la corrupción y la ingobernabilidad ligada a todo ello.

Lo que sucede en Afganistán y Colombia —el apoyo norteamericano con tropas, equipos y recursos financieros para continuar esta guerra fracasada— es un

indicador de que no existe ninguna voluntad de cambio.

El calco y copia de la política peruana

El gobierno peruano, a través de Devida, Ofecod, Dirandro y demás organismos generados, ha continuado copiando estas políticas, erradicando cultivos en el Alto Huallaga y Aguaytía —más de 10,000 hectáreas en 2009—, militarizando la principal zona productora (el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE), criminalizando al conjunto de los agricultores cocaleros y pretendiendo controlar el consumo interno de drogas, sin lograrlo.

Del mismo modo, también se ha continuado fracasando en el llamado «desarrollo alternativo», salvo algunas pocas excepciones en el Alto Huallaga y Aguaytía, que confirman la regla, pero no tienen la debida extensión en cuanto a número de productores, ni tam-

el dato

Su estrecha relación con el narcotráfico, y el cambio operado en su discurso y accionar anteriores, le han permitido a Sendero fortalecerse en el VRAE y el Alto Huallaga. Mientras tanto, el gobierno continúa fracasando en el llamado «desarrollo alternativo», salvo algunas pocas e insostenibles excepciones en Aguaytía y el Alto Huallaga.

poco sostenibilidad ambiental, ni en el tiempo.

Nada hace presagiar que en 2010 el gobierno decida cambiar las políticas y acciones que ha venido aplicando hasta la fecha. Más aún, ni siquiera hay elementos que permitan prever una apertura para debatir las políticas públicas sobre el tema.

La tendencia en América Latina es a cuestionar el prohibicionismo en curso, tal como lo vienen haciendo varios gobiernos latinoamericanos —Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Venezuela—, pero, en el Perú, la política de drogas y cultivos de coca con fines ilícitos —o, incluso, lícitos—, sencillamente, no se discute públicamente.

A principios de 2009, un intento del alcalde aprista de Surquillo, que cuestionó la prohibición del uso de la marihuana, fue rápidamente aplastado con llamadas al orden por parte del embajador norteamericano. Ahora, las airadas reacciones en contra que ha desatado un reciente artículo de Vargas Llosa¹, en donde el escritor sostiene que el tema no es policial, sino económico, y que la llamada guerra contra las drogas es un enorme fracaso («no se declaran guerras que no se pueden ganar»), llevan a pensar que en 2010 se continuará esta política de no discutir oficialmente las estrategias en curso y de aplastar con satanizaciones cualquier intento de plantear alternativas.

Un movimiento social dividido

Los movimientos sociales ligados al cultivo de coca se han dividido aun más en 2009. En la actualidad existen por lo menos cuatro sectores diferentes y agriamente enfrentados: a) la Central Nacional de Campesinos Productores de Coca del Perú (Cenacop), en el valle del Monzón y una parte del Alto Huallaga (Aucayacu); b) la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpacop), en el Alto Huallaga, una parte del VRAE, Aguaytía, Sandía y Kcosñipata; c) la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (Fepcacyl), en Cusco; y d) la Federación Campesina del Valle del



En 2009, los movimientos sociales ligados al cultivo de coca se dividieron aun más.

Río Apurímac y Ene (Fepavrae), entre Cusco y Ayacucho.

Los agricultores de coca de estas cuatro zonas siguen sin articular sus luchas a las de otros sectores sociales del campo. Sus líderes están enfrentados y no resuelven sus contradicciones, y su representación parlamentaria —Nancy Obregón y Elsa Malpartida— muestra limitaciones serias en su accionar. Además, carecen de propuestas comunes contra las políticas de erradicación y «desarrollo alternativo»; buscan interlocución con el gobierno, aislados de los productores de otras zonas; y no se pronuncian sobre las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Como movimiento, están cada vez más aislados y faltos de representatividad.

De cara al 2010, no parece haber indicadores de que esta situación será superada, sino que más bien se agravará, debido a la competencia electoral para gobiernos locales, regionales y representación parlamentaria.

La coca y los dos Senderos

En medio de las circunstancias descritas, el terrorismo de los dos Senderos realmente existentes —el del VRAE y el del Alto Huallaga— se ha rearticulado durante 2009 y ha realizado acciones armadas de envergadura contra las

FF.AA. y policiales en ambos frentes, un proceso que venía desarrollándose desde mediados de la década.

Ambos sectores subversivos se han fortalecido mucho en sus respectivas áreas. Ambos han consolidado su relación con el «narcotráfico», convirtiéndose en protectores de sus actividades, y han logrado armarse con equipos de guerra y comunicaciones tomados de las fuerzas represivas. Además, han construido una red de inteligencia local más eficiente que la de las FF.AA., y en ambas zonas Sendero ha logrado un apoyo cada vez mayor de las poblaciones locales al cambiar su anterior discurso y accionar autoritario y tanático, lo que les ha permitido incrementar el número de sus integrantes.

Si durante 2010 el gobierno y las FF.AA. no cambian la estrategia equivocada que están impulsando, las fuerzas senderistas seguirán creciendo y «derramándose» hacia otras zonas, tal como lo están haciendo desde 2008 hacia Huancavelica, Junín y Cusco, en la sierra y la selva central y sur, o Ucayali, Pasco y La Libertad, en la selva y la sierra norte.

Notas

¹ Publicado el 10 de enero en *El Comercio* y en *El País* (España).